



*Comisión de Probidad*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

-000013-

13 de Octubre de 2005

Licenciado  
Luis Eduardo López Ramos  
Director Legislativo  
Congreso de la República  
Su Despacho

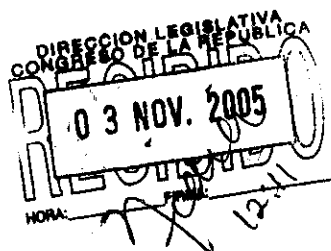
Respetable Licenciado López:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en las diferentes actividades que realiza diariamente.

De acuerdo en lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 del Decreto 63-94 del Congreso de la República, me permito hacer de su conocimiento, que en la Comisión de Probidad, fue recibida la Iniciativa de Ley número 3145, "que Dispone aprobar la Ley de Investigación, Control y Fiscalización de Ingresos y Gastos Públicos Presupuestados", por lo que por unanimidad de los miembros Diputados que integran esta Comisión se emite DICTAMEN DESFAVORABLE.

Sin otro particular y para los efectos jurídicos pendientes, se remite el Dictamen en mérito.

Atentamente,



  
**Lic. Ángel Mario Salazar**  
**Presidente**





-000014-

*Comisión de Probidad*  
*Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

**HONORABLE PLENO**

Con fecha 2 de febrero del año en curso, fue recibida en esta Comisión la Iniciativa de Ley número 3145 (Iniciativa que dispone aprobar la Ley de Investigación, Control y Fiscalización de Ingresos y Gastos Públicos Presupuestados) presentada por el Diputado Rafael Barrios y compañeros.

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

La transparencia en el gasto público y la eficiente ejecución de presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado por parte de los organismos del Estado, entidades autónomas y entes descentralizados es uno de los pilares del Estado de Derecho. La Constitución Política de la República sienta los principios generales en los cuales debe basarse dicha ejecución mas son las leyes ordinarias y los reglamentos los que finalmente determinan la ejecución en términos específicos, además por supuesto de los decretos que anualmente aprueban el Presupuesto General del Estado.

Pero pueden existir malos manejos de los bienes del Estado por parte de los funcionarios de turno que, por imprudencia, impericia o negligencia no controlan debidamente las cantidades que tienen asignadas las dependencias o instituciones que dirigen. En este caso existen una serie de sanciones administrativas que deben aplicarse luego de determinar que efectivamente fue por estas razones que se utilizaron indebidamente los recursos. Más grave aún es el caso cuando existe dolo en la administración de bienes y cantidades, en cuyo caso lo que procede es una investigación por parte del Ministerio Público y su consecuente persecución penal.

Para esto, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con varias instancias e instituciones especializadas en el control y fiscalización del gasto público como lo es específicamente la Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público y por supuesto el Congreso de la República a través de sus distintas instancias (diputados por cuenta propia, bancadas comisiones, etc.)

Así pues, las instituciones e instancias antes mencionadas cuentan una serie de herramientas jurídicas para realizar esas funciones contenidas en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos, Leyes Orgánicas de los organismos del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, Ley de la Contraloría General de Cuentas, Leyes específicas de entidades autónomas y descentralizadas y por último el Código Penal y Procesal Penal dado el caso de la comisión de delitos.

**ANALISIS DE LA INICIATIVA 3145:**

La exposición de motivos de la iniciativa hace referencia a que a través de los distintos gobiernos y administraciones ha habido innumerables señalamientos de corrupción, malversación y malos manejos de fondos públicos. Menciona que ha habido toda clase de negocios fraudulentos e impúdicos (sic) desprestigiando de esa manera la función pública.



*Comisión de Probidad*  
*Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Asimismo indica que nos encontramos viviendo violencia política (sic) dando a entender que en todo caso eso se debe a los malos manejos de los fondos públicos, hecho que es facilitado por la poca transparencia en el gasto y la secretividad en algunos casos.

Como es citado en la exposición de motivos, el artículo 30 de la Constitución establece que todos los actos administrativos son públicos salvo en caso de secreto militar o diplomático y los interesados pueden solicitar copias de las actuaciones en cualquier tiempo, lo cual es sustanciado con el artículo 31 de la Carta Magna.

Como fue apuntado anteriormente, en el rango ordinario existen una serie de leyes y reglamentos que desarrollan los conceptos plasmados en la Constitución y que sirven para hacer efectivos los mismos, leyes de aplicación general que pueden servir de asidero legal para cualquier ciudadano, organización o institución pública o privada para obtener las informaciones del gasto y funcionamiento del Estado que consideren oportunas.

La iniciativa de ley en cuestión redunda en los principios plasmados en la Constitución y en los conceptos desarrollados en las leyes ordinarias de control y fiscalización del Estado, por lo que resulta obvia e innecesaria y en el caso del artículo 1, pudiese ser incluso inconstitucional, ya que el mismo indica que ningún organismo del Estado o sus instituciones están excluidas o exentas de investigación, control y fiscalización en el manejo de sus ingresos y gastos, lo cual colisiona con el artículo 30 de la Constitución que establece 2 supuestos en lo que no es posible la fiscalización (secreto militar o diplomático). Resulta curioso que en la propia exposición de motivos sea citado y el primer artículo de la iniciativa pueda ser inconstitucional.

Los demás artículos como fue apuntado anteriormente simplemente redundan en las capacidades y funciones ya contempladas en el ordenamiento jurídico para el control y fiscalización del manejo de fondos del Estado.

**CONCLUSIONES:**

La iniciativa de ley identificada con el número 3145 es inocua, no aporta nada al ordenamiento jurídico ni al control y fiscalización de la administración pública, simplemente recoge principios ya contenidos (pero dispersos) en el ordenamiento jurídico guatemalteco.

El combate a la corrupción y a la opacidad en el manejo de fondos públicos es, como se dijo al principio del presente dictamen, uno de los pilares del Estado de Derecho y debe ser una la actividad primordial de los entes estatales encargados de la función fiscalizadora, pero para ello deben utilizarse los mecanismos y herramientas contemplados actualmente en la Constitución, leyes ordinarias y reglamentos.

Resulta evidente que con las herramientas actuales se han encontrado una serie de anomalías en el manejo de fondos públicos, pues los medios de comunicación da cuenta de ello. Los diputados al Congreso de la República han podido hacer una fiscalización acorde a sus capacidades y conocimientos lo cual ha resultado en muchas ocasiones en denuncias formales



-000016-

*Comisión de Probidad*  
*Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

ante el Ministerio Público, momento desde el cual es éste quien debe utilizar las herramientas jurídicas para combatir la corrupción.

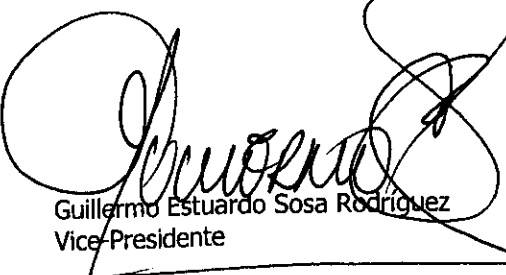
Resulta entonces que utilizando y basándose en las leyes actuales se debe atacar el derroche y malos manejos de fondos públicos, pues aunque la función legislativa es constante y las leyes deben ir reflejando los avances culturales y sociales, es por la vía judicial, no la legislativa, que se controla y fiscaliza más eficientemente.

**DICTAMEN DE LA COMISION:**

Con base en lo anterior y lo que para el efecto establece el artículo 171 inciso i) de la Constitución Política de la República; Decreto 101-97 del Congreso de la República; 39, 40, 41, 111 y 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la Comisión de Probidad emite **DICTAMEN DESFAVORABLE** a la iniciativa enviada por el Representante Rafael Eduardo Barrios Flores y compañeros identificada con el número 3145, iniciativa que dispone aprobar la LEY DE INVESTIGACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS PRESUPUESTADOS, y lo somete a consideración del Honorable Pleno.

**DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE PROBIDAD A LOS DOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO.**

  
**ANGEL MARIO SALAZAR MIRÓN**  
**PRESIDENTE**

  
Guillermo Estuardo Sosa Rodríguez  
Vice-Presidente

  
Moisés David Chuva de León

  
Juan Daniel Fuentes Velásquez

  
José Leopoldo Cruz Clavería



-000017-

*Comisión de Probidad*  
*Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Gladys Anabella de León Ruiz

  
César Augusto Fajardo Rodríguez

Julio René Morales Arévalo

Rubén Darío Morales Véliz

Jorge Luis Ortega Torres

  
Mario Taragena Díaz-Sol

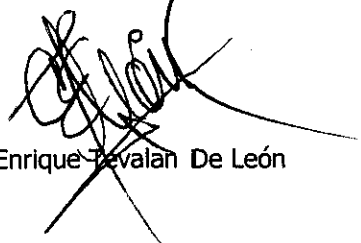
Enrique Pinto Martínez

  
Obdulio Oqueli de León

Mario Ronaldo Pivaral Montenegro

  
Mario Israel Rivera Cabrera

Edgar Leonel Rodríguez Lara

  
Carlos Enrique Tevalan De León

Obdulio Solórzano Montepeque

  
Jorge Roberto Alfaro Alvarado